

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	1124
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2020-00189-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
DEMANDADO:	ÁLVARO CERÓN REYES
VINCULADA:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
ASUNTO:	Decreta suspensión provisional actos acusados

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

Se decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos. 12496 del 1º de diciembre de 1994 y 31787 del 14 de diciembre de 2000, que la parte demandante formuló en el escrito de demanda.

II. ANTECEDENTES

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por conducto de apoderado especial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el señor Álvaro Cerón Reyes, y como medida cautelar deprecó la suspensión provisional de los actos demandados, esto es, la Resolución No. 12496 del 1º de diciembre de 1994, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez temporal a favor del demandado, y la Resolución No. 31787 del 14 de diciembre de 2000, por la cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, que prorrogó de manera vitalicia el disfrute de la pensión de invalidez ya reconocida al accionado, actos administrativos que a su juicio desconocieron preceptos constitucionales y legales.

2. Del escrito de suspensión provisional se corrió el traslado previsto en el inciso 2 del artículo 233 del CPACA, oportunidad en la cual el apoderado del demandado adujo que la pensión de invalidez y vejez reconocidas son compatibles, por lo que debe garantizarse el derecho a la seguridad social hasta tanto se adopte una decisión de fondo, amén de que el primer acto administrativo atacado definió una situación consumada conforme a derecho y el segundo no es susceptible de control judicial por ser un acto de ejecución.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 238 de la Constitución Política consagra que *“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”*.

A su turno, el artículo 229 del CPACA prevé que *“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que*

considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 231 *ibídem*, prescribe que *“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”* (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo constituye una excepción a la presunción de legalidad que los ampara, de manera que por su trascendencia el legislador ha dispuesto que su viabilidad requiere que la solicitud esté debidamente motivada, que la infracción de las normas superiores en que se fundó o debía afincarse sea manifiesta y que pruebe siquiera sumariamente los perjuicios si pretende la indemnización de éstos.

Como se trata de una medida cautelar preventiva, su finalidad es la de asegurar transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, es decir, impedir la aplicación del acto administrativo impugnado y precaver eventuales perjuicios, mientras se resuelve de manera definitiva la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza jurídica de esta cautela y sus rasgos esenciales, el Consejo de Estado ha indicado:

“La medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como medida cautelar que es, según las voces del artículo 229 del C. de P.A. y de lo C.A. exige ‘petición de parte debidamente sustentada’, y acorde con el artículo 231 ibídem, procederá ‘por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud’.

La nueva norma precisa que: 1º) La medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. 2º) La procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad pueden acontecer si la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal -cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que antes era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos adicionados con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio, pues la transgresión debía aparecer prima facie. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que, desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa alegada, pudiendo al efecto: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º inciso del artículo 229 del CPACA, en cuanto ordena que ‘la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’ (Auto del 24 de enero de 2013, exp. 2012-00068-00).

Es claro, entonces, que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo acusado supone unos requisitos formales y otros sustanciales, cuya inobservancia podrían dar al traste con la solicitud de cautela. Entre los primeros aparecen, por una parte, la sustentación de la medida, esto es, la indicación de las normas violadas y el concepto de violación, advirtiendo que tal justificación deber ser independiente de la aducida en la demanda para fundar la nulidad, es decir, una cosa es la argumentación de la suspensión provisional y otra la de la nulidad, a menos que en aquella se remita para tal efecto a esta; y por la otra, la demostración, siquiera sumaria, del perjuicio que con el acto impugnado se le cause o llegare a causar, si entre sus pretensiones figura la indemnización del mismo.

En el presente caso, la parte demandante considera que la pensión por invalidez reconocida en forma temporal por la Resolución No. 12496 expedida el 1° de diciembre de 1994 por la Caja Nacional de Previsión Social y prorrogada por la Resolución No. 31489 del 14 de diciembre de 2000, en cumplimiento de una sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria laboral, es incompatible con la pensión de vejez reconocida el 15 de marzo de 2010 por el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, toda vez que contrarían el artículo 128 de la Constitución Nacional y las reglas jurisprudenciales sobre el tema.

Señaló que los desembolsos mensuales certificados por el consorcio FOPEP demuestran el detrimento que le viene causando al erario público, pues tal reconocimiento pensional se hizo sin apego a las normas que las rigen, pues las pensiones de las cuales es beneficiario el demandado son incompatibles entre sí por contravenir el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y además cubrir el mismo riesgo.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 231 del CPACA, es requisito sustancial para que proceda la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que la violación de las normas superiores citadas como infringidas, surja del análisis de la decisión acusada y su confrontación con tales preceptos o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, por lo que corresponde acometer esa tarea en seguida.

La Corte Constitucional ha señalado que la pensión es un *"salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo"*. Por lo tanto, *"el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador"*. Esto muestra que la pensión es un derecho constitucional de amplia configuración legal, pues corresponde a la ley definir los requisitos para acceder a la misma. Además, se trata de un derecho que no es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador" (Sentencia C-177 de 1998).

El Consejo de Estado, en sentencia del 7 de febrero de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso con radicación interna No. 5418-18, determinó que una vez se analizaron los artículos 229 a 231 del CPACA, los requisitos para decretar las medidas cautelares se clasifican en tres categorías, consistentes en: i) requisitos formales, ii) requisitos materiales y iii) requisitos de procedencia específicos. Veamos:

"De las normas antes analizadas¹ se desprende, que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de procedencia específicos (...).

6.3.1.- Requisitos de Procedencia, Generales o Comunes de Índole Formal. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,² de índole formal,³ son: **(1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción**

¹ Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231.

² En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

³ En la medida en que estos requisitos únicamente exigen una corroboración formal y no un análisis valorativo.

de lo contencioso administrativo;⁴ **(2)** debe existir solicitud de parte⁵ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio.⁶

6.3.2- Requisitos de Procedencia Generales o Comunes de Índole Material. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,⁷ de índole material,⁸ son: **(1)** que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia;⁹ y **(2)** que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.¹⁰

23. Respecto del primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, esto es, que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso, la Sala aclara, que el «objeto del proceso», desde un primer nivel de significación, que se corresponde con la teoría procesalista clásica, es la materia o cuestión del litigio, el «thema decidendi» que se somete a consideración de la jurisdicción, e involucra, no sólo las pretensiones, sino que también hace referencia a los hechos, normas y pruebas en que estas se fundan.

24. Ahora bien, desde un punto de vista constitucional de aplicación del principio de primacía del derecho sustancial,¹¹ el «objeto del proceso», y en general «de todo proceso que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo», también comprende, en armonía con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011,¹² la finalidad de asegurar la «efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley y la preservación del orden jurídico». Dicho de otro modo, el objeto de todo proceso judicial es en últimas, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, el decreto y ejecución de una medida cautelar también debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estos no estén en discusión, aclara la Sala.

25. Así pues, es claro para la Sala, que el juez contencioso debe evaluar con especial cuidado si la medida cautelar solicitada en verdad está orientada a garantizar el objeto del proceso, puesto que al ordenar su decreto también se pueden lesionar las prerrogativas fundamentales de los perjudicados con las medidas cautelares. Ante tales circunstancias, las autoridades judiciales deben propender por aplicar las normas pertinentes al caso concreto, de manera tal que logre el menor perjuicio posible a los derechos fundamentales, siempre que estos no estén en discusión, se reitera.

26. Finalmente, ya para agotar lo que tiene que ver con el primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, la Sala precisa que respecto de la exigencia de que la medida cautelar solicitada esté orientada a garantizar la efectividad de la sentencia, ello se explica en razón de que con las cautelas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, es decir, que propenden por la seriedad de la función jurisdiccional, y por esta vía, guardan relación directa con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en la medida que con las medidas cautelares también se asegura que las decisiones de los jueces sean ejecutadas y cumplidas.

6.3.3.- Requisitos de Procedencia Específicos de la Suspensión Provisional de los efectos del acto administrativo. La Sala los denomina «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las diferentes medidas cautelares enlistadas, a modo enunciativo, en la Ley 1437 de 2011.¹³ Entonces, en cuanto a

⁴ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

⁵ De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

⁶ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

⁷ En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

⁸ En la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo.

⁹ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

¹⁰ Artículo 230, Ley 1437 de 2011.

¹¹ Artículo 228 de la Constitución Política de 1991. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será descentrado y autónomo.

¹² Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹³ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda¹⁴ así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud;¹⁵ y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios”.

Conforme a lo anterior y descendiendo al caso concreto, se advierte que la solicitud cumple con el primer “requisito común de índole formal”, pues la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, solicita la nulidad de la Resolución No. 12496 del 1º de diciembre de 1994, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez temporal al demandado; y de la Resolución No. 31787 del 14 de diciembre de 2000, a través de la cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, que prorrogó de manera vitalicia la pensión de invalidez ya reconocida al demandado.

En cuanto a los “requisitos comunes de índole material”, la jurisdicción ha predicado que sobre estos hay unos sub-requisitos, a saber: i) que la medida cautelar sea necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y ii) que la cautela tenga relación directa con las pretensiones de la demanda. Justamente, sobre este último requisito, es evidente que lo cumple la solicitud de medida cautelar, pues las razones centrales consisten en que los actos administrativos acusados quebrantaron la prohibición constitucional de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público y la incompatibilidad legal entre la pensión por invalidez y la pensión de vejez reconocidas al demandado, por lo que se genera un detrimento al erario público, y bajo esas tesis es que se encuentra fundado el litigio.

Frente al primer sub-requisito, esto es, que la medida cautelar sea necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, es imperativo determinar si se cumple o no, y para ello se precisa lo siguiente:

El artículo 128 de la Constitución Política prescribe:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

Y, el concepto de incompatibilidad pensional, ya venía siendo objeto de regulación legal, pues así lo previó el artículo 31 del Decreto-ley 3135 de 1968. Obsérvese:

“Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas”.

El artículo 88 del Decreto 1848 de 1969 también se refirió a la incompatibilidad pensional, a saber:

“Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente”.

¹⁴ Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

¹⁵ Artículo 231, inciso 1º, Ley 1437 de 2011.

La Ley 100 de 1993 no fue ajena al asunto de incompatibilidad de pensiones, y en su artículo 13, literal j), señaló:

“Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

(...).

j) Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez; (...).”

Por su parte, el Consejo de Estado se refirió a la incompatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez, indistintamente de su origen, en los siguientes términos:

“(...) tal como lo ha señalado esta Corporación, se presenta incompatibilidad entre las pensiones de vejez y/o jubilación e invalidez, bien sea de origen común o profesional, porque el ordenamiento jurídico restringe dicha posibilidad y, por tanto, no pueden ser disfrutadas conjuntamente con base en lo siguiente:

1. Tienen su origen en una misma relación laboral;

2. Están condicionadas a los aportes que la demandante haga a la seguridad social;

3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de jubilación y/o vejez tiene como finalidad cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez también busca cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir, cumplen la misma función protectora” (Sentencia del 10 de agosto de 2017, expediente 19001-23-33-000-2014-00076-01(4773-15).

Y, en sentencia del 21 de julio de 2016, radicación interna 1793-15, la misma Corporación ya había sostenido:

“(...) se colige con absoluta claridad que cuando una pensión, sea de invalidez o jubilación, reconocida en razón de los aportes efectuados por el afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no es factible el reconocimiento simultaneo con la otra pensión, pues se estarían reconociendo dos pensiones por una misma causa, situación que se encuentra restringida toda vez que la normativa aplicable y la jurisprudencia han establecido la incompatibilidad entre los dos tipos de pensiones, resultando jurídicamente inviable que una misma persona perciba simultáneamente la pensión de invalidez y la de jubilación”.

En virtud de lo anterior, la pensión por invalidez reconocida al señor Álvaro Cerón Reyes, primero de manera temporal y luego en forma vitalicia, devino incompatible con la pensión de vejez reconocida al mismo titular mediante Resolución No. 102887 expedida el 15 de marzo de 2010 por el Instituto de Seguro Social, pues tales prestaciones económicas están destinadas a amparar el mismo riesgo, esto es, la pérdida de la capacidad laboral, ya sea por enfermedad (común o laboral) o por la edad, unido a que el ordenamiento constitucional y legal prohíbe que una persona perciba doble asignación del tesoro público y devengue una y otra pensión en forma simultánea.

De conformidad con lo expuesto, es evidente que el reconocimiento pensional por invalidez realizado en favor del señor Álvaro Cerón Reyes, mediante las Resoluciones Nos. 12496 del 1º de diciembre de 1994 y 31487 del 14 de diciembre de 2000, al sobrevenir el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Social, hoy Colpensiones, contraría en forma manifiesta la Constitución, la ley y la jurisprudencia, pues es claro que dicha prestación, como se indicó, no puede ser recibida en forma concomitante con la pensión de vejez, ya que el demandado devengaría un doble estipendio del erario.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que con la expedición del acto de reconocimiento de la pensión de vejez, las resoluciones acusadas que reconocieron la pensión por invalidez devinieron inconstitucionales e ilegales por la incompatibilidad entre tales pensiones, y con ello se causó una afectación grave al erario público, pues se le está pagando al demandado dos asignaciones a cargo del tesoro público, esa notable contrariedad con el ordenamiento

jurídico impone el decreto de la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos. 12496 del 1º de diciembre de 1994 y 31487 del 14 de diciembre de 2000, para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Finalmente, no se ordenará constituir la caución prevista en el artículo 232 del CPACA, por tratarse de la suspensión de los efectos de un acto administrativo y porque la parte solicitante es una entidad pública, circunstancias que la relevan de esa carga procesal.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1.- DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 12496 del 1º de diciembre de 1994, por medio de la cual Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez temporal al señor Álvaro Cerón Reyes; y de la Resolución No. 31787 del 14 de diciembre de 2000, mediante la cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y prorrogó de manera vitalicia la pensión de invalidez ya reconocida, solicitada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

2.- ABSTENERSE de ordenar a la parte demandante que constituya caución porque la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo está relevada de tal carga procesal y, además, por haber sido solicitada por una entidad pública.

3.- REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

DSBA

Auto 1 de 2

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab7d3193329f8c59eb219132e4bf46c6e555d9cf039b43110b03e5c52dd45f46**

Documento generado en 12/12/2022 03:15:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>